

Chile: conflictos ambientales locales y profundización democrática*

Francisco Sabatini**

En una evaluación a primera vista, es posible reconocer tanto razones de esperanza como otras de desaliento con respecto a las posibilidades que tienen los profesionales y las ONG comprometidos con valores de igualdad y solidaridad social de contribuir a la profundización democrática de nuestras sociedades. Entre las primeras destacan la movilización de la sociedad civil durante las últimas décadas y entre las segundas, el desencanto y aparta de la población con la política y el establecimiento de una alianza entre estado y economía corporativa a expensas de la sociedad civil.¹

La política latinoamericana tiende a «encapsularse» en los afanes compartidos entre estado y economía corporativa por la competitividad y la inserción económica internacional, dejando a la población librada a lo que el «chorreo» pueda darle.

La democracia parece sobrellevar una crisis profunda, siendo una de sus manifestaciones más visibles y notorias el distanciamiento de la población respecto de la política formal y de los políticos (Garretón, 1995; Mires, 1994; Franzé, 1994; Moisés, 1994). Sin embargo, al mismo tiempo el régimen democrático se ha impuesto en todo el continente. Esta es la paradoja central de la democracia en nuestros días, paradoja que se manifiesta con especial fuerza en América Latina. Será el tema de la primera sección.

El argumento central del presente trabajo es que estos cambios en los regímenes y cultura política representan un contexto favorable para la acción de profesionales y ONG en pos de la emancipación de los más pobres y de la profundización democrática. El argumento será referido a un área de problemas y tensiones que parece encerrar posibilidades especialmente interesantes: la de los conflictos ambientales locales (CAL).

Los CAL se están multiplicando debido a las nuevas inversiones productivas, la importancia de la explotación de recursos naturales en las exportaciones, la mayor conciencia ambiental y el crecimiento demográfico. En la segunda sección discutiré casos de CAL que hemos estudiado en los últimos tres años en Chile.

En la tercera sección se identifican, en la forma de tensiones existentes, algunos espacios de libertad claves que proporcionan los CAL a los profesionales comprometidos con el cambio. El argumento de fondo es que, por tratarse de conflictos distributivos más que de meros conflictos ambientales, los CAL abren la posibilidad de recuperar para la política latinoamericana su gran tema perdido —el nervio de su fu-

* Versión modificada del trabajo «Local Environmental Conflicts: Opportunities for Radical Planning» presentado ante el seminario «Planning and the Rise of Civil Society (A Symposium Celebrating the Planning Career of John Friedmann)», Universidad de California, Los Angeles, Abril 11-13, 1996.

** Sociólogo y Ph. D. en Planificación Urbana, UCLA. Profesor Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Católica de Chile. Coordinador del proyecto de investigación de Cipma (ONG ecologista chilena) sobre «Conflictos ambientales en Chile», financiado por la Fundación Ford. El autor agradece a Tim Almark sus valiosos comentarios a este trabajo.

¹ Por sociedad civil entenderemos aquella esfera de las relaciones sociales que permanece fuera del alcance del estado y la economía corporativa y que está compuesta por estructuras de socialización (la familia, principalmente), asociaciones (especialmente las voluntarias) y movimientos sociales o de formación de opinión pública (Friedmann, 1992; Cohen y Arato, 1994).

turo lo mismo que de su pasado—: las desigualdades sociales y la distribución de la riqueza.

PARADOJA DEMOCRÁTICA Y SOCIEDAD CIVIL EN AMÉRICA LATINA

La sola estabilidad democrática actual plantea una paradoja si se considera cuál ha sido la historia del continente hasta no hace mucho: una sucesión de gobiernos emanados de elecciones y de golpes de estado. Una posible explicación es que parece tratarse de una nueva forma de colonialismo, de imposición de soluciones desde fuera por las naciones poderosas del Norte, de la misma forma como se ha impuesto el modelo económico neoliberal. Sin embargo, esta explicación no da cuenta de las movilizaciones sociales contra la corrupción y en favor del saneamiento democrático. Los presidentes Fernando Collor de Brasil y Carlos Andrés Pérez de Venezuela no pudieron terminar sus periodos presidenciales como efecto de juicios por corrupción respaldados por una enérgica movilización de la sociedad civil. La población también ha respaldado los procesos de purga y saneamiento democráticos en otros países, como México, Colombia y Ecuador. Hay ex presidentes y políticos destacados encarcelados, procesados o buscados por la justicia en varios países.

En estas movilizaciones de la sociedad civil se mezclan objetivos prodemocráticos con otros, como la lucha contra la corrupción y la influencia de las mafias de la droga, o la defensa de los derechos humanos. En Chile ha sido condenado y encarcelado el que fuera director de la policía política del régimen de Pinochet en su etapa más represiva, el general Manuel Contreras, sin duda uno de los hombres políticamente más poderosos del país.

Sin la vigilancia activa de la sociedad civil estas situaciones habrían sido impensables. ¿Qué está detrás de este despertar de la sociedad civil latinoamericana? Por de pronto, está ocurriendo algo bastante más profundo que la simple aceptación de una moda democratizadora internacional. Hay un cambio cultural en marcha que, teniendo mucho en común con lo que está ocurriendo en el mundo, presenta especificidades latinoamericanas.

Cinco factores que parecen estar impulsando este cambio en la cultura política latinoamericana, son los siguientes:

1. *La masiva introducción de inseguridad en la vida de la gente.* El deterioro ambiental (y la mayor conciencia sobre el mismo), la llamada «flexibilización» de los mercados de trabajo, la reestructuración de las economías y el debilitamiento del Estado del Bienestar, son todos factores universales de producción de inseguridad entre la gente. El avance de las mafias de las drogas debe ser considerado una causa que genera la inseguridad social característica de América Latina, donde se encuentran las principales zonas productoras de cocaína.²

En el pasado, la inseguridad se equiparaba a la falta de control sobre el mundo natural, y el progreso consistía en controlar nuevos fenómenos y espacios. Era la «economía de frontera», de acuerdo a la terminología de Colby (1991). En cambio, la inseguridad que enfrentamos hoy es básicamente provocada por nosotros mismos. Proviene de la destrucción del medio ambiente —un factor de inseguridad especialmente importante para comunidades pobres de economía primaria, como veremos en los casos chilenos de conflictos ambientales— y de fenómenos como las migraciones y el problema de los refugiados, la corrupción y las mafias, y la inseguridad laboral. Giddens habla de la «incertidumbre manufacturada» (1994).

2. Un segundo factor corresponde al *debilitamiento universal de las ideologías políticas*, lo que en América Latina conduce al retroceso o desaparición de las propuestas de transformación social global que eran parte del panorama político del continente.

3. *La mayor conciencia y capacidad de reflexión crítica de la población* es un tercer factor de cambio en la cultura política. El carácter «manufacturado» de la incertidumbre tiene de positivo el promover entre la gente una mayor reflexión crítica sobre la organización social y política que nos hemos dado como seres humanos, sobre nuestras metas colectivas y sobre nuestros valores. Esta reflexión crítica ha sido estimulada por

² Sin embargo, a pesar de lo sería que es esta amenaza y del grado en que pueda comprometer la recién ganada estabilidad democrática, la lucha contra la droga está alcanzando éxitos inéditos, en parte importante por el respaldo de la población a esta lucha.

la revolución de las comunicaciones y, en particular, por la «televisión global». La vieja aspiración de Paulo Freire del desarrollo de una «conciencia crítica» entre la gente, especialmente pobre, está encontrando un terreno abonado.

4. El cuarto factor corresponde al *surgimiento de nuevos valores*. No cabe duda que nuevos valores universales se han ido afianzando entre la población de todos los países. Los derechos humanos, la democracia, y el medio ambiente son tal vez los principales.³ El valor de «lo propio», de las identidades étnicas y culturales fuertemente asociadas al territorio, también es un valor universal, aunque pueda tener el tono de lo reaccionario. El valor de la felicidad, al punto del hedonismo, es defendido más abiertamente que antes. Se observa una renovada orientación hacia lo lúdico y hacia vivir el tiempo presente. Siendo esta orientación un fenómeno universal propio de tiempos de crisis (Pronovost, 1989), se refleja claramente entre los latinoamericanos, especialmente entre su juventud.⁴

En general, todos estos valores se han fortalecido como reacciones de las personas contra fuerzas poderosas que han trastocado sus vidas y que los han sumido en incertidumbres de distinto tipo. No se trata de nuevas propuestas de transformación social, aunque estas reacciones puedan favorecerlas.

5. La *concentración de la gente en los asuntos que afectan su vida diaria* es un quinto factor que parece estar modificando la cultura política. La salud, la pobreza, el medio ambien-

te y la delincuencia son, entre otros, los temas que más preocupan a las personas y las familias. Están todos marcados por la incertidumbre y la inseguridad social.

Los cinco factores de cambio señalados —inseguridad, desideologización, conciencia crítica, emergencia de nuevos valores y concentración de la gente en sus intereses directos— están facilitando la emergencia de una nueva realidad social y política en América Latina. Aunque el punto de llegada no esté claro, podemos reconocer ciertas tendencias. Las resumiremos en tres.

1. La primera de ellas es el *retroceso de las concepciones instrumentales de la democracia*. La aspiración por la integración social ha sido, sin duda, el sello del patrón cultural latinoamericano, y la idea de democracia llegó a ser equivalente al principio ético de la integración social o de la así llamada «democracia social». La ciudadanía se llegó a concebir como la reivindicación de «derechos sociales», tales como vivienda, empleo y salud. Esta visión favoreció una relación de dependencia respecto del estado. Antes que una reivindicación de autonomía «frente al estado» —lo propio de la concepción liberal original de democracia—, la democracia pasó a representar la protección de la gente por parte del estado (Faletto, 1992). También la derecha supeditó la democracia política al desarrollo económico, y cuando lo consideró necesario alentó u organizó golpes de estado.

Asistimos a la revalorización entre la población de la idea liberal europea originaria de la democracia y, más específicamente, de la concepción minimalista de la democracia como «conjunto de reglas procesales» que incluyen las elecciones periódicas y las libertades de asociación y de opinión (Bobbio, 1992).⁵

2. *Desarticulación de la matriz política tradicional de América Latina*. El avance de los nuevos valores de la globalización y la consolidación de la estrategia económica neoliberal, están favoreciendo la desarticulación de la vieja matriz política latinoamericana.

Bajo el modelo de desarrollo de «industrialización por sustitución de importaciones», el estado latinoamericano subsumía a la economía y a la sociedad. Estas eran hasta cierto punto apéndices del estado, que las controlaba y dirigía su evolución. Era más fácil para un empresario privado lograr

³ Las tandas de avisos que intercalan los canales de noticias de la televisión por cable, que está en rápida expansión en América Latina, están orientados justamente a reforzar los valores democráticos, ambientales y de derechos humanos. Este hecho parece representar un reconocimiento de que son temas que importan a la gente.

⁴ Los bailes del Carnaval de Oruro en Bolivia, practicados hasta hace pocos años por los estratos sociales más pobres y de unas seis horas de duración cada día, ahora integran a gentes de todas las condiciones sociales y se extienden a doce horas diarias. En Chile, el fútbol profesional, a pesar del pobre nivel que presenta, está convocando a multitudes y sus barras exhiben un nivel de organización increíble. El aumento del número de partidos transmitidos por televisión no ha mermado la asistencia del público a los estadios.

⁵ Por cierto, el retroceso de las concepciones instrumentales de democracia no pone fin al enfoque social de la democracia. La discusión entre los énfasis social o político que se da al concepto y a la práctica de la democracia es universal y puede ser considerada como permanente.

ganancias a través de medidas de protección, subsidios o apoyos especiales del estado que compitiendo en los mercados. El estado ejercía, además, como empresario: creaba y administraba grandes empresas consideradas estratégicas.

Por otra parte, el estado tendía su manto protector sobre la sociedad reconociendo (y financiando) nuevos «derechos sociales». El modelo latinoamericano de «industrialización sustitutiva» terminó como consecuencia de lo que anticipatoriamente en 1967 John Friedmann denominó «crisis de inclusión»: a saber, la incapacidad del estado de satisfacer demandas sociales cuya magnitud y peso político se acrecentaban con la «hiper-urbanización» (Friedmann & Lackington, 1967).

Sin duda, la desintegración de la matriz ha sido acelerada por la adopción del modelo económico neoliberal. Los procesos de privatización, liberalización de mercados, eliminación de subsidios y racionalización del gasto público han ido redefiniendo la relación entre estado y economía, y aquella entre estado y sociedad. Los tres polos han cobrado autonomía entre sí.

La economía corporativa se ha fortalecido y ganado independencia respecto del estado. Desde un plano de mayor equilibrio de fuerzas, estado y economía han establecido una alianza estratégica en pro de la competitividad económica internacional, aunque cargada de tensiones políticas. Por su parte, la sociedad ha sido «externalizada» respecto del estado. La protección paternalista ha disminuido o desaparecido, y la población ha quedado librada a las oportunidades que el crecimiento de la economía pueda brindarle.

El populismo, la modalidad de acción política más común y más propia de la vieja matriz política, y el proteccionismo, expresión de la tutela estatal en el área de la economía, están en retroceso en el continente. Queda planteada la duda sobre hasta qué punto la desintegración de esta matriz política implicará también cambios en pautas culturales mucho más antiguas que el modelo de «industrialización sustitutiva», especialmente la que se refiere al rol tutelar que ha tenido el estado sobre las sociedades latinoamericanas desde el momento mismo de la conquista. El paternalismo estatal y el centralismo político son realidades culturales, en gran medida heredadas de los conquistadores, que podrían estar iniciando un retroceso. El

deterioro ambiental está conectado con el centralismo político y más adelante veremos cómo los CAL pueden vincularse con la lucha anti-centralista en cada país.

3. Una tercera tendencia es la *pérdida de contenido social de la política formal y su distancia respecto de los intereses de la gente*. El retroceso de las concepciones instrumentales de la democracia y el ascenso del modelo neoliberal de desarrollo han drenado a la política oficial latinoamericana de parte importante de sus contenidos propositivos, en particular de aquellos referidos a la superación de la pobreza y las desigualdades sociales.

La lucha por el poder y las ambiciones personales ocupan un mayor espacio relativo. Los partidos pierden militantes y se vuelven doblemente cupulares: internamente y con respecto a la base social. Su función de mediación entre el estado y las demandas de la sociedad civil se ha debilitado considerablemente. Aparecen insertos en la máquina del estado y preocupados de la buena marcha de la estrategia económica o de acrecentar sus cuotas de poder, más que de las demandas de la gente. Esta es una tendencia igualmente válida para países en que el divorcio entre ciudadanos y partidos políticos ha sido siempre marcado, como Brasil y Bolivia, o para países con sistemas de partidos más arraigados y estables, como Chile y Uruguay.

La incapacidad del modelo económico neoliberal de combinar crecimiento con redistribución social de la riqueza está acelerando cambios en la cultura política latinoamericana que se inscriben en tendencias mundiales y que han tenido y tendrán como principal actor a la sociedad civil. En efecto, la reemergencia del discurso sobre la sociedad civil está en el corazón del vasto cambio en la cultura política contemporánea (Cohen y Arato, 1994). A pesar de llevar ya cierto tiempo, el ascenso de la sociedad civil es un proceso histórico que aún no ha perdido fuerza ni vigencia (Friedmann, 1996).

CONFLICTOS AMBIENTALES LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL EN CHILE

La noción autoritaria y verticalista del poder que los latinoamericanos heredamos de los conquistadores nos hace refrac-

tarios a la idea misma del conflicto. Lo entendemos como algo excepcional, que sale del flujo normal de las relaciones sociales, y que debe ser evitado. Las autoridades los ignoran y, cuando no pueden hacerlo más, tienden a resolverlos imponiendo una decisión administrativa.

Aún en periodos democráticos, nuestra habilidad para hallar salidas negociadas y pragmáticas a los conflictos es baja. El desafío actual que los CAL nos plantean en América Latina no está referido, por lo mismo, tanto a las técnicas de negociación —que concentran la preocupación de los profesionales de naciones desarrolladas— como a las estrategias políticas necesarias para empujar la formación de mesas de negociación. Y en esa labor política los profesionales comprometidos con el cambio están llamados a desempeñar un papel destacado.

Muchos de los CAL que están surgiendo en gran número se originan en inversiones productivas, destacando las orientadas a exportar recursos naturales. Los CAL son conflictos entre actores de una localidad suscitados básicamente por intereses contrapuestos en torno al impacto ambiental de una determinada actividad.⁶

Las actividades que generan el impacto ambiental suelen también producir beneficios, como empleo y estímulos a la economía local, lo que hace compleja la evaluación que la población y las autoridades locales hacen de aquellas. Aunque las diferencias valóricas también juegan en los CAL, la posibilidad de negociar soluciones es, en principio, alta. Entre la población impera el pragmatismo ambiental, especialmente en comunidades pobres. La gente quiere y necesita el crecimiento económico y acoge los proyectos de inversión pero; al mismo tiempo, la degradación ambiental puede afectar seriamente su calidad de vida.

El análisis de los CAL en Chile ofrece algunas ventajas. La de Chile es una economía de rápido crecimiento fuertemente dependiente de la explotación de recursos naturales —exportación de «commodities»—, lo que está favoreciendo una amplia gama de impactos ambientales, la erosión de ecosistemas, el descenso de la calidad de vida, y la multiplicación de CAL a través del país.

Por otra parte, Chile es el país que primero inició la reforma económica y fue de los últimos en recuperar la democracia. Hay una brecha enorme entre crecimiento económico e impactos ambientales, por un lado, y capacidad de acción ambiental tanto a nivel popular como estatal, por el otro.⁷ Los CAL que están surgiendo son, por lo mismo, desafíos de gestión no menores, tanto desde la perspectiva del estado como de la movilización de la sociedad civil en la defensa de sus espacios vitales.

En tercer lugar, Chile tiene una larga tradición de acción social y política en la base de la sociedad y, al mismo tiempo, el que quizá sea el sistema político más centralista de América Latina. Los CAL ponen en tensión estos dos elementos antagónicos de la cultura política chilena, en condiciones en que el rol de mediación que cumplieron históricamente los partidos políticos entre sociedad civil y estado se ha debilitado significativamente.

Por último, las tendencias de polarización social que subyacen al crecimiento económico chileno hacen que la dimensión político-distributiva envuelta en los CAL aflore con más claridad. Revisaremos cuatro casos.

LAS CHIMENEAS DE PUCHUNCAVÍ

Puchuncaví es una comuna agrícola y pesquera situada en la costa al norte de Valparaíso. Tiene aproximadamente diez mil habitantes, especialmente campesinos y pescadores. Han sufrido por treinta años los efectos sobre la economía y la salud de la contaminación industrial producida por dos plantas de gran tamaño construidas por el Estado como un «polo de desarrollo» para esta región: una planta termoeléctrica (privatizada en 1987) y, principalmente, una fundición de cobre productora de lluvia ácida. Sin embargo, estas industrias han

⁶ Estos conflictos in situ deben diferenciarse de los conflictos «de enfoque» relativos a políticas ambientales, donde intervienen fuertemente las diferencias valóricas (Bingham, 1986).

⁷ La recuperación reciente de la democracia en 1990 explica que en Chile haya una capacidad de gestión pública ambiental y un movimiento ecologista menos desarrollado que en otros países. Bajo el régimen militar se llegó a afirmar que «la mejor política ambiental es no tener política ambiental» para así atraer a los inversionistas extranjeros. Aún más, durante ese gobierno toda forma de acción organizada de denuncia, incluida la ecologista, era sospechosa de ser antichilena y podía ser reprimida.

hecho una importante contribución a la movilidad social y han estimulado una rápida urbanización de la comuna (Malman, Sabatini & Geisse, 1995).

La primera impresión que se lleva un visitante del lugar es la aparente pasividad y resignación de la gente frente a esta verdadera agresión ambiental de tres décadas de duración. Sin embargo, este largo conflicto ha tenido varios «puntos altos», siendo tres los principales, y de los cuales se pueden extraer reflexiones más generales. El denominador común es la capacidad de acción organizada de la comunidad.

El primero fue el conflicto que suscitó la ubicación del complejo industrial. Distintas localidades lucharon por ganarse este polo industrial. La comunidad de Puchuncaví, cuya agricultura estaba en declive, demostró tener capacidad de organización y de presión y ganó. Es notable constatar que en esa época había plena conciencia de los riesgos ambientales del proyecto.⁸ Finalmente, en un demostración de «fundamentalismo económico», esto es, de total prioridad por los objetivos económicos a expensas de la conservación ambiental, el proyecto se ejecutó con la activa complicidad de la misma comunidad de Puchuncaví. La pobreza crea condiciones inmejorables para que surja esta complicidad autodestructiva.⁹

Un segundo momento culminante fue la movilización de la comunidad en los años posteriores a la puesta en marcha de las plantas para protestar por el impacto de los humos sobre la salud y la agricultura. La movilización adoptó variadas formas, pero esta vez no tuvo éxito. El daño ambiental era considerado un costo del progreso y los afectados debían sacrificarse por la región y el país.¹⁰

Tal vez la demostración más importante de la capacidad de organización local que existe en Puchuncaví es la planificación de los llamados bailes «chinos», eventos semipaganos que se celebran durante las festividades religiosas (Sabatini & Mena, 1995). Puchuncaví es el centro de una red cultural y religiosa prehispánica que cubre una vasta región costera de Chile. Los bailes «chinos» han absorbido a lo largo del tiempo el catolicismo. El vocablo «chino», de origen indígena, significa servidor de la divinidad. Durante las festividades religiosas, los bailes exhiben una sofisticada organización enraizada en la devoción y el fortalecimiento social. Son gen-

te pobre que carecen de apoyo de «agentes externos». De hecho, la Iglesia desconfía de estas prácticas semipaganas. Ellos diseñan y fabrican sus cuidadas vestimentas, y financian viajes y estadías en los pueblos donde se realiza cada fiesta.

Los bailes «chinos» y sus rogativas a la Virgen y al Señor se refieren a problemas vitales y cotidianos, y no tan sólo a asuntos religiosos. Difícilmente se los podría catalogar como gente alienada. Quienes integran las cofradías suelen participar en otras organizaciones comunitarias, como bomberos —que en Chile son voluntarios—, juntas de vecinos, clubes deportivos o centros de padres. La existencia de estos bailes religiosos es tal vez el mejor mérito para quienes culpan —demasiado rápido— del daño ambiental de Puchuncaví a la propia comunidad por su pasividad y falta de organización.

En los años posteriores a la inauguración de las plantas, los bailantes «chinos» incorporaron en sus rogativas a la Virgen el tema de los humos de las chimeneas. Pero actualmente las rogativas no hacen mención a ellos, a pesar de que el daño a los suelos y a la salud de la población y de los animales es

⁸ La reapertura de la vieja fundición Chagres por capitales privados cuando el Estado construya la fundición Ventanas fue decididamente criticada por los grupos de Valparaíso que habían luchado por la concreción del nuevo polo industrial estatal. En la prensa de la época abundan estas críticas, entre ellas las de carácter ambiental. Se señalaba que la reapertura de esa fundición, por las emanaciones que produciría, llevaría la ruina a la agricultura y la ganadería del valle del Aconcagua y que afectaría seriamente la salud de la población. En el caso de la fundición de Ventanas, se estimaba que su emplazamiento costero haría menos graves los impactos ambientales en comparación con localizaciones alternativas, pero había conciencia de que ellos ocurrirían de todos modos.

⁹ La retroalimentación entre pobreza y degradación ambiental no requiere, sin embargo, la presencia de inversionistas externos a la localidad para existir; ocurre, por ejemplo, en comunidades rurales pobres geográficamente aisladas que cuentan con economías primarias no diversificadas (Arenas y Sabatini, 1994).

¹⁰ Aun antes, en 1957, cuando se discutía la ubicación de la futura fundición de cobre y en respuesta a las inquietudes de agricultores de la zona de Puchuncaví, el diario *El Mercurio de Valparaíso* señalaba en su edición del 17 de julio: «Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios; de otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte en el país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse».

acumulativo en el tiempo. La explicación dada por los líderes de estos grupos religiosos habla por sí sola. Gerardo señala:

No pedimos actualmente a la Virgen por lo de los humos porque esas no son cosas de fe. Sólo se piden al Señor y la Virgen las cosas de fe, lo que usted cree que puede conseguir.

Ernesto agrega:

Hicimos rogativas porque terminaran los humos, pero eso fue mucho tiempo atrás... había esperanza. No voy a decir que la Virgen se puso sorda, pero en realidad harto hemos hecho por terminar con la contaminación y no sacamos nada. Nosotros nos aburrimos ya. No se saca nada. Todo esfuerzo es inútil. Ahora todo depende de los grandes políticos, de los de arriba.

La pasividad que exhiben los puchuncavinos en los periodos de relativa desmovilización no es, por tanto, un rasgo absoluto. Nace de la resignación. Pasividad y desmovilización son fenómenos inducidos por la falta de expectativas de poder influir en el curso de los acontecimientos. Y el estado tiene una gran responsabilidad. Sus políticas de descentralización del poder no son suficientes. Además, sigue evaluando la organización autónoma de la población más como una amenaza que como una forma de desarrollo democrático.

Pero la pasividad se alterna con la movilización de otros periodos. El tercer momento de movilización coincidió con la democratización del país. Se extendió desde meses antes de la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988 hasta 1990, poco después de inaugurado el gobierno demo-

crático, cuando los intentos de «cooptación» del movimiento por parte de las autoridades y empresas rindieron frutos.¹¹ Se vivían elecciones cruciales para el futuro del país y existía un ambiente internacional de vigilancia ecologista. El tema de la privatización de las empresas que aún quedaban en manos del Estado, como esta fundición y refinería de cobre, era abiertamente agitado por la derecha. La empresa estatal, principal responsable de la contaminación atmosférica de Puchuncaví, se encontraba en una posición de relativa debilidad, y esta vez no pudo hacer oídos sordos a las demandas de la comunidad.

Luego de dos años de movilización de la comunidad y en pleno régimen democrático, el alcalde convocó a la formación de un Comité de Defensa del Medio Ambiente, al que se integraron representantes de los grupos de la comunidad más activos y de las dos empresas contaminantes. El nuevo gobierno democrático instaló un sistema de monitorización de la contaminación del aire en distintos puntos de la comuna, formalizó un «plan de descontaminación» gradual, y organizó un fondo para concurso de microproyectos productivos para ser administrado por el Consejo Municipal (electo democráticamente). Además, ambas empresas empezaron a hacer inversiones orientadas a elevar su productividad y abatar los niveles de las emanaciones.¹²

El Comité de Defensa del Medio Ambiente se ha mantenido como una instancia formal, donde las empresas exponen sus planes y acciones, pero donde no se discute ni negocia el tema ambiental. Tampoco se controla ni evalúa desde allí el avance del «plan de descontaminación». Las relaciones entre empresas y comunidad, con el Alcalde ejerciendo un rol mediador, consisten en un flujo cruzado de demandas de la comunidad y aportes de las empresas para la solución de problemas y aspiraciones puntuales no relacionados con el tema ecológico. Ha habido aportes para electrificación rural, equipamiento de las escuelas, y capacitación laboral, entre otros. Desde entonces, ha tenido lugar lo que Gorczinsky denomina «negociación ambiental informal» (1991). Las partes no reconocen estar negociando el aspecto ecológico, pero sus relaciones están condicionadas por él.

Las empresas y el Estado han logrado debilitar el movimiento ambientalista local. Han centrado sus propuestas en

¹¹ La cooptación consiste en socavar la fuerza de la parte contrincante por la vía de reducir su independencia.

¹² En términos prácticos, el «plan de descontaminación» significó que la contaminación por encima de las normas quedara legalizada por varios años. Hasta el fin del régimen militar ambas empresas no reconocían que contaminaban y los fallos de la justicia adversos a los agricultores señalaban que los daños denunciados no podían ser atribuidos con entera seguridad a los humos de esas chimeneas. Después de aprobado el «plan de descontaminación» los fallos de la justicia han apelado, aunque sea implícitamente, al carácter «legal» de la contaminación.

Chile: Conflictos ambientales locales

descontaminar, rechazando de plano las compensaciones que pedían las organizaciones locales para llevar adelante un «plan de desarrollo local alternativo». Al mismo tiempo, cooptaron a algunos de sus dirigentes. La comunidad ha probado que puede infligir costos a las empresas agitando el tema ambiental, pero su poder es aún limitado. El equilibrio se ha establecido en una suerte de «extorsión subordinada». La comunidad está consiguiendo aportes a cambio de un relativo silencio. El Alcalde ha sido un maestro en administrar este equilibrio. Los habitantes y sus dirigentes no están plenamente satisfechos. Piensan que por ahora no se puede hacer más, que están consiguiendo algunas cosas. Pero manifiestan plena conciencia de que, con sus aportes, las empresas les están «emborrachando la perdiz» (Sabatini, Mena y Vergara, 1996).

El conflicto de Puchuncaví nos enseña tres cosas sobre los CAL. Primero, que la pobreza es un obstáculo para avanzar en la protección del medio ambiente; segundo, que el Estado tiene un rol indispensable que desempeñar en permitir y alentar la organización de la comunidad y, con ello, la resistencia a formas de desarrollo económico que deterioran el medio ambiente y la calidad de vida; y, tercero, que la conjunción entre movilización organizada de la comunidad, por una parte, y contexto político democrático y preocupación pública por el medio ambiente, por otra, impiden la continuación de prácticas de «fundamentalismo económico» como las que llegaron a ser tradición en el prolongado conflicto ambiental de Puchuncaví.

LA «PRIMAVERA DORADA» DEL CAPITALISMO SALVAJE

En abril de 1993 la empresa maderera Golden Spring («primavera dorada»), con casa matriz en Hong Kong, compró un fundo de aproximadamente 23.000 hectáreas, cubierto de bosque nativo en la austral Isla de Chiloé. Su proyecto consiste en la explotación a gran escala del bosque con el fin de exportar «rolizos» de madera autóctona. La Isla es asiento de comunidades indígenas huilliches —«gente del mar»—, uno de cuyos asentamientos principales es vecino al fundo de Golden Spring. El conflicto se desató cuando la empresa, sin

permiso y con engaños, inició el ensanche de un camino que le permitiría sacar la madera y que atraviesa la propiedad en la que se ubica la comunidad indígena.

Las organizaciones indígenas plantearon demandas territoriales y ecológicas y, con el apoyo de grupos ecologistas, lograron generar en pocas semanas un conflicto de notoriedad nacional. Las demandas territoriales de los huilliches incluían la restitución de los derechos de propiedad privada violados al construir ilegalmente el camino, el reconocimiento de los derechos de propiedad ancestrales sobre parte de las tierras adquiridas por la empresa maderera, y la defensa de su economía local, que incluye una explotación artesanal del bosque nativo, además de agricultura, ganadería y pesca (Septúlveda, 1995a). Esta última demanda territorial se refiere a la defensa de su «espacio vital» (Friedmann, 1988). Las demandas ambientales buscan garantizar la sustentabilidad del ecosistema que soporta su economía y, al mismo tiempo, defender la organización política de los indígenas.

En contraposición, la demanda de los grupos ecologistas y de las agencias gubernamentales con responsabilidad en el tema, como la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Corporación Nacional Forestal, se centró en la conservación del bosque nativo chileno. La empresa fue interpelada en función de esta demanda más estrictamente ecológica. La discusión nacional entre enfoques de política ambiental sobre el bosque nativo afloró a propósito del conflicto de Chiloé. Es una discusión de años todavía no resuelta en el país. Aún no existe una ley sobre bosque nativo, a pesar de dos proyectos enviados por el gobierno al parlamento en los últimos cinco años.

Por otra parte, cuando el conflicto subió en intensidad, las agencias públicas locales, en parte por su debilidad, y los empresarios, como forma de evitar negociaciones inconvenientes para ellos con la comunidad local, solicitaron la intervención de las autoridades del gobierno nacional. Desecharon, así, una instancia de negociación que se había formado en el lugar pero que aparecía difícil de conducir hacia un esquema de «negociación informal», como el de Puchuncaví. A pesar de la buena disposición de la empresa para establecer ese tipo de relaciones, muestra de lo cual son las ofertas de aportes a la solución de problemas locales que alcanzó a ha-

cer, esta posibilidad abortó. La causa fue, en parte, que los indígenas no estuvieron dispuestos a transar sus demandas territoriales ancestrales y de defensa de su economía territorial y, en parte, la figuración nacional que el conflicto había alcanzado y la vasta movilización de grupos ecologistas en torno a él.

Aunque la pobreza de muchos campesinos, indígenas o no, ha generado cierto apoyo local para la presencia de la empresa, la oposición local y nacional ha sido tan fuerte que la explotación maderera está actualmente detenida. La empresa desarmó sus maquinarias y se las llevó en barcos y despidió a la mayor parte de sus trabajadores. Se vive un periodo de incertidumbre en que la empresa aparece jugando la última y más fuerte de sus cartas: la amenaza de abandonar el proyecto. Es la extorsión llevada a su clímax por una empresa que, a diferencia de muchas otras, puede desmontar sus instalaciones. Algunos alcaldes de comunas de la Isla que podrían beneficiarse con las oportunidades de empleo que abre el proyecto, lo mismo que las autoridades provinciales y regionales, han lamentado públicamente la interrupción del mismo.

El conflicto en torno al proyecto de Golden Spring se centralizó, perdiendo influencia las organizaciones huilliches y, en general, la comunidad local. La situación generada se ajusta a una suerte de «paradoja de la figuración pública exitosa», la que parece propia de sistemas políticos centralistas: cuanto más sensibilizada esté la opinión pública nacional sobre un CAL, y más se involucre en la demanda de su solución, mayor es el riesgo de que éste termine como campo de batalla de un conflicto *entre enfoques* a nivel central y que, como resultado, el conflicto *in situ* quede oculto tras un debate fundamentalista que entorpece y retarda su solución (Sepúlveda, 1995b).

La centralización del conflicto ha significado la polarización del debate entre los intereses económicos y los intereses ecologistas en torno al bosque nativo. Mientras tanto, las

posiciones más cercanas al ideal del desarrollo sustentable —compatibilizar crecimiento económico y conservación ambiental—, como la que defienden los huilliches, perdieron fuerza. La razón de fondo que desplaza a un CAL como éste de su eje original es tan obvia que se la pasa por alto fácilmente: mientras la comunidad local está vitalmente interesada en compatibilizar crecimiento y conservación, para superar su pobreza sin socavar su calidad de vida, los agentes externos, incluyendo los inversionistas, el gobierno nacional y los ecologistas de Santiago, no tienen ese mismo compromiso vital. Unos defienden la prioridad de las inversiones como fuente de generación de ganancias, impuestos y empleos, por sobre la conservación ambiental; y los otros aparecen dispuestos a la protección de los bosques muchas veces a riesgo de volver inviables los proyectos económicos. A pesar de la vigorosa reacción nacional que el proyecto de Golden Spring provocó y que tiene detenida la explotación maderera, los huilliches y la comunidad local no han sido claros ganadores.

El conflicto de Chiloé nos enseña sobre los riesgos de centralización de los CAL, tanto en términos de su gestión como de sus contenidos. En términos políticos, parece necesario enfatizar la dimensión territorial de los CAL y no dejarse llevar por una visión demasiado «experta» centrada en las variables ecológicas, como la de muchos de los ecologistas. Los conflictos ambientales son, en buena medida, conflictos por el control de las economías territoriales y de los «espacios vitales» de la gente. La descentralización del poder político en favor de las comunidades territoriales parece crucial para dotar de mayor poder a quienes están vitalmente interesados en el desarrollo sustentable.

SANTIAGO COMO LEONIA: LA CIUDAD DE LAS BASURAS¹³

Santiago de Chile, con sus más de cinco millones de habitantes, ha tenido dificultades para encontrar dónde depositar sus basuras. Los dos grandes vertederos con que contaba Santiago hasta hace poco se colmaron y su cierre se postergó varias veces. Desde 1993 se han buscado nuevos emplazamientos en los alrededores de la ciudad, lo que ha suscitado una se-

¹³ «Tal vez el mundo entero, tras pasados los confines de Leonia, está cubierto de cráteres de basura, cada uno, en el centro, con una metrópoli en erupción ininterrumpida» (Calvino, 1988).

Chile: Conflictos ambientales locales

guidilla de conflictos entre las autoridades y los vecinos de los lugares preseleccionados.¹⁴ Los vecinos de los antiguos rellenos sanitarios han estado en pie de guerra durante los últimos años reclamando porque se cumpla con el cierre definitivo de estas instalaciones (en Lerda y Sabatini, 1996 se estudia el problema de los residuos domiciliarios de Santiago).

Como en varias otras ciudades de América Latina, la falta de anticipación y la debilidad de la planificación urbana, junto a una mayor conciencia ambiental y fortaleza de la sociedad civil, han vuelto altamente conflictivo el tema de la basura de las ciudades.

Tal vez quien más ha tenido que lidiar con el tema de la basura de Santiago es el Alcalde de Til-til, una comuna escasamente poblada de familias pobres en el límite norte de la ciudad. Es una excelente localización para uno de los tres grandes rellenos sanitarios que las autoridades se propusieron construir para la ciudad. La distancia al centro de la ciudad es comparativamente corta, y sus suelos son de seco y de baja calidad agrícola.

Hubo dos negociaciones con Til-til a propósito de la basura de Santiago que vale la pena comparar. La primera fue una negociación con ribetes de escándalo público. La comunidad de Til-til, con su Alcalde a la cabeza, reaccionó enérgicamente a la decisión de la empresa Emeres, constituida por la mayor parte de los municipios de la ciudad, de localizar su próximo relleno sanitario en la comuna. Los directivos de la empresa intentaron establecer relaciones «cordiales» con el Alcalde y dirigentes comunitarios, mostrándose dispuestos a hacer aportes para la comuna. La notoriedad pública que tuvo el conflicto gracias a la prensa, y la unidad que mantuvieron entre sí los distintos grupos y dirigentes de la comunidad, dieron mucha fuerza negociadora al Alcalde. Pudo forzar una mesa de negociación y exigir la concurrencia de parlamentarios y del Intendente de la Región Metropolitana para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Fue asesorado por profesionales de grupos ecologistas. Se acordaron públicamente una serie de compensaciones que incluían, entre otros, aportes permanentes al presupuesto del municipio y un concurso anual de becas de estudio para escolares.

Finalmente, el sitio seleccionado fue desechado por las autoridades del gobierno nacional y, con él, los acuerdos lo-

grados. La razón que se adujo es que un estudio técnico más profundo había determinado que el sitio presentaba riesgos de contaminación de aguas subterráneas. Otra razón no declarada fue el disgusto del gobierno con el tipo y la forma de la negociación realizada. Las autoridades son reticentes a la idea de las compensaciones y a que la discusión se escape de los temas estrictamente ambientales. Además, el carácter público con que se habían negociado las compensaciones sentaba un precedente que consideraban peligroso, pensando en futuros conflictos.¹⁵

El segundo caso corresponde a una localización cercana a la anterior, al otro costado de la carretera Panamericana, principal acceso a la ciudad. La iniciativa esta vez fue de la otra empresa, «Cerros de Renca», que agrupa a dieciséis municipios de las zonas Norte y Oriente de Santiago. Tuvo lugar una extensa negociación a puertas cerradas entre los alcaldes, representados por la empresa «Cerros de Renca», el contratista privado que construiría y operaría el relleno sanitario, y el Alcalde de Til-til.

La primera decisión de estos negociadores fue excluir a la prensa del acceso libre a la información, y manejar muy cuidadosamente las relaciones con ella. El Alcalde piensa que en el anterior conflicto la prensa llegó a tener un grado de influencia excesivo y negativo, lo que finalmente parece haber sido importante en el fracaso de las negociaciones.¹⁶

El Alcalde estableció una negociación a tres bandas: con

¹⁴ Los alcaldes de los 34 municipios en que está dividida el área urbana de Santiago son los responsables del manejo de la basura. Se encuentran agrupados en dos empresas, cada una de las cuales administra uno de los dos rellenos sanitarios colmados.

¹⁵ En entrevista que realizamos en noviembre de 1995, el Director de la Comisión Regional del Medio Ambiente, autoridad encargada de seleccionar la localización de los rellenos sanitarios (según una disposición administrativa adoptada recién en junio de 1995), fue enfático en rechazar la incorporación a las negociaciones de temas ajenos a los ambientales.

¹⁶ En entrevista que realizamos en diciembre de 1995 el Alcalde de Til-til señaló: «La prensa tiene que vender... ¡Caramba, es un monstruo de mil cabezas que nos estaba devorando en forma casi total! La prensa nos hacía aparecer como negativos, no receptivos, que no queríamos diálogo... Al tratar de contribuir a agilizar la solución del problema, inconscientemente ellos van agudizando el conflicto, van creando mayor presión».

los alcaldes interesados en depositar su basura en Til-til, con la empresa contratista, y, en forma separada, con el gobierno central. Él no podía oponerse legalmente a que el relleno sanitario se localizara en su comuna, pero tenía la posibilidad de entorpecer el proceso, postergando su puesta en funcionamiento. La presión social por el cierre de los vertederos antiguos volvía crítica la variable tiempo, dando al alcalde de Til-til un gran poder negociador. Fue así como consiguió que cada uno de sus tres interlocutores accediera a pagar cuantiosas compensaciones de distinta naturaleza a la comunidad local para que el relleno sanitario comenzara a operar en marzo de 1996, como estaba contemplado y como se requería urgentemente.

El Alcalde considera que este relleno sanitario se suma a otros dos proyectos localizados en Til-til que también los afectan negativamente: un tanque de relave que la estatal mina de cobre Andina está pronta a construir, y la cárcel de alta seguridad inaugurada el año pasado en la localidad de Punta de Peuco —donde está preso el general Contreras—. «Esta es otra situación dañina al medio ambiente... aunque en este caso al medio ambiente social», nos decía el Alcalde refiriéndose a la cárcel. Al menos en el caso de la basura —reflexionaba— la comunidad de Til-til ha tenido la posibilidad de defenderse y quizá pueda llegar a un arreglo más justo.

En último término, la de la basura de Santiago es una negociación política en que los aspectos ambientales son importantes, pero secundarios. El tipo de negociación y los acuerdos alcanzados han dependido de la fuerza que ha podido exhibir cada una de las partes en el conflicto. El hecho de que se haya llevado a cabo una negociación explícita y formal de compensaciones con la comunidad de Til-til (aunque protegida de la publicidad) representa una situación inédita en el país, y refleja el virtual empate de fuerzas a que se llegó en un momento entre la comunidad de Til-til y su Alcalde, por una parte, y la ciudad de Santiago, sus autoridades y las empresas de la basura, por otra.

Otra enseñanza que deja este largo y multifacético conflicto por la basura de Santiago es la similitud que existe en-

tre los CAL y otros conflictos derivados de cambios de uso del suelo, como puede ser la instalación de una cárcel o la realización de proyectos inmobiliarios, incluidos los urbanos.

MINERA «ESCONDIDA» GANA MUCHA PLATA

La compañía Minera Escondida, constituida por capitales privados de varios países, muy pronto pasará a ser la principal productora de cobre fino del mundo. El yacimiento de Escondida está en el altiplano, a 160 kilómetros de la ciudad portuaria de Antofagasta. Un ducto que atraviesa el desierto y desciende hasta la localidad de Coloso, en el extremo sur de Antofagasta, conduce el concentrado de cobre en forma líquida hasta una planta que le extrae el agua, la purifica parcialmente y la arroja al mar a través de un rubo de 1300 metros de largo. El concentrado en polvo es embarcado allí mismo. La producción comenzó en 1991, y poco después la empresa construyó una fábrica de cátodos de cobre en el mismo Coloso.¹⁷

Desde antes de entrar en producción, este proyecto ha suscitado críticas y diversas protestas por parte de grupos de la comunidad de Antofagasta. Los reparos son de tipo ambiental: contaminación del mar por las aguas vertidas, contaminación de la costa por polvo de concentrado, y riesgos para la población por la instalación de la fábrica de cátodos en un lugar tan cercano a la ciudad.

Uno de los momentos más álgidos del conflicto lo suscitó la empresa, justamente, cuando anunció su proyecto de fabricación de cátodos. La circulación de camiones con materiales peligrosos a través de barrios residenciales fue un riesgo agitado por grupos ecologistas que puso en guardia, entre otros, a los vecinos de uno de los barrios más ricos de Antofagasta. El movimiento contra Escondida logró convocar a ecologistas, profesores universitarios, juntas de vecinos, funcionarios públicos y la prensa local.

Minera Escondida ha tenido desde un comienzo una política ambiental moderna y se ha ajustado a estándares internacionales incluso más exigentes que la propia legislación chilena. En cada uno de los puntos levantados por sus críticos, la empresa ha podido defenderse bien. Mantiene siste-

¹⁷ Los cátodos son planchas de cobre refinado a través de procesos hidrometalúrgicos.

mas de monitorización permanente de las variables ambientales que pueden ser afectadas por sus faenas. Una de las facetas más notables de este conflicto es que otras empresas localizadas en Antofagasta y sus alrededores, tanto públicas como privadas, funcionan con estándares ambientales muchísimo más bajos y no han sido sometidas a una crítica tan severa.

En nuestro estudio constatamos que las críticas y protestas contra Escondida contaban con un amplio respaldo entre los diversos sectores de la comunidad. Pero al mismo tiempo la gente reconocía que la empresa mantenía estándares ambientales superiores al promedio de las empresas mineras y portuarias de la región. Entonces, ¿por qué concentrar la crítica en Escondida? (Geisse y Sabatini, 1993)

Las respuestas principales para esta paradoja son dos. La primera es la inseguridad que siente la población frente a proyectos productivos de gran escala como el de Escondida cuando existe un notorio vacío en la capacidad de control y gestión ambiental de las autoridades locales, como sucedía en Antofagasta hacia 1993. Esa inseguridad, acrecentada por la mayor conciencia ambiental de la población, se transforma en apoyo para quienes aparecen defendiendo los intereses de la gente frente a las empresas, especialmente los grupos ecologistas.

La segunda respuesta fue manifestada explícitamente por la gente: Escondida gana mucha plata y no hace gran cosa por la ciudad y la región, que aún tienen muchos problemas y déficits. La respuesta a veces incluía motivaciones ideológicas —el viejo recelo contra el capital extranjero— y a veces trazas de una cultura «dependiente» —el asignar a terceros, como el estado o las empresas, la responsabilidad por cubrir las propias carencias—. Pero lo más importante es que en todos los casos las opiniones contenían un juicio claro y enfático: la riqueza generada no está siendo distribuida como sería justo. Y el tema ambiental proporciona una oportunidad para manifestar ese descontento; suele ser el talón de Aquiles de estas poderosas empresas. En suma, el conflicto ambiental de Escondida es más que un conflicto ambiental; es un conflicto distributivo con dimensiones ambientales.

LOS CONFLICTOS AMBIENTALES LOCALES Y LA ACCIÓN POR EL CAMBIO

El nivel de conciencia ambiental existente es indispensable para que un impacto ambiental sea reconocido como un problema público que requiere solución; y la movilización organizada de la comunidad, requisito para que el problema dé lugar a un conflicto ambiental (Sabatini, 1994). De esta forma, el surgimiento de un CAL representa, por sí mismo, un progreso. Sin embargo, el centralismo político obstaculiza que los CAL puedan dar lugar a una negociación ambiental local. Hay dos tipos de obstáculos centralistas: la falta de apoyo y recelo del Estado frente a la organización de la comunidad; y las tendencias a la centralización de los CAL, tanto en términos de contenidos como de gestión.

Los CAL están cruzados por estas y otras tensiones. A continuación se revisarán parcialmente algunos de los rasgos centrales de los CAL, en base a los casos de estudio reseñados, y luego se discutirán esas tensiones. El propósito es ofrecer una reflexión acerca de las oportunidades de acción política que los CAL abren.

Los problemas ambientales son inherentemente conflictivos. Es difícil cuantificarlos, identificar sus causas y sus responsables, y precisar quiénes se benefician y perjudican con ellos (Guimaraes, 1991). El conocimiento científico de ellos, como el conocimiento científico en general, es hipotético. Entre conocimiento y decisiones media un espacio de incertidumbre y de disputas. Cuando se trata de impactos ambientales derivados de inversiones productivas, en ese espacio se juega mucho: ganancias económicas, por una parte, y calidad de vida, control de los espacios vitales y seguridad, por otra.

Los conflictos ambientales locales son conflictos políticos. La relación de fuerzas determina si los problemas se expresan como conflictos, y cuál es la forma de su resolución. Ésta puede ser la negociación ambiental o alternativas no-democráticas, como la típica decisión administrativa de los gobiernos en favor de los intereses económicos.

Por otra parte, los aspectos técnicos y científicos de los conflictos no son los más gravitantes para su solución a través de la negociación ambiental, al contrario de lo que se tiende a pensar. Aquellos son aspectos también controvertibles, suje-

tos a la manipulación. Según Gorzinsky, «los ingenieros y otros fríos y desapasionados expertos», por su lenguaje y por su arrogancia científica, no logran jugar bien el complicado juego de la negociación ambiental y terminan desempeñando un rol secundario (1991). Por su parte, Susskind *et al.* (1983) destacan las limitaciones del conocimiento científico como base para la resolución de disputas ambientales, y cómo este hecho reduce la efectividad de las salidas judiciales a los conflictos.

Los conflictos ambientales locales son conflictos distributivos. No están en disputa tan sólo los impactos ambientales de los proyectos, sino también sus impactos económicos, culturales y sociales. Las externalidades ambientales causantes de estos impactos exceden los mecanismos de mercado y parecen estar más allá de la capacidad de acción (y del interés) de los círculos de la política oficial. Los CAL representan, por tanto, un campo para la acción política directa como la que suelen privilegiar los profesionales que trabajan por el cambio.

Los conflictos ambientales locales son conflictos territoriales. No está en disputa tan sólo la conservación de los recursos naturales o el equilibrio de los ecosistemas sino que, más integralmente, los sistemas de vida locales y el control de los territorios. La «defensa de la naturaleza» debe ser entendida como defensa de un «mundo vital» (Gorz, 1994). En los CAL colisionan «espacio económico» y «espacio vital» (Friedmann, 1988); se vinculan, de modo inestable, las formas sociales locales con las globales.

Los conflictos ambientales locales tienen un potencial político de transformación social. La pobreza puede ser un obstáculo para que los problemas ambientales deriven en CAL y para que éstos tengan una salida negociada que equilibre los intereses económicos con los conservacionistas. Los pobres aparecen dispuestos a transar sus intereses más mediatos, como los de conservación ambiental, por intereses inmediatos, como empleo y satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo y

paradójicamente, el ecologismo practicado por los pobres tiene un potencial de transformación social del que carece la acción ecologista de otros grupos más acomodados.

La movilización de los vecinos de Pirque, un sector periférico de Santiago, contra la construcción de un gasoducto, o el «movimiento vecinal» venezolano de las últimas décadas, tienen el valor de constituir formas de acción política al margen de los partidos, pero la limitación de ser movimientos de ciudadanos-propietarios que defienden el *statu quo*. Representan una forma de ciudadanía excluyente, donde el «otro» (especialmente si es pobre) es reconocido como amenaza al patrimonio ambiental y económico privado y no como un ciudadano con iguales derechos (Lander, 1994).

En cambio, la pobreza empuja a la gente a practicar un ecologismo que abre perspectivas de cambio más profundas.¹⁸ La emergencia de CAL en que están involucradas comunidades pobres debe ser considerada como una oportunidad valiosa para recenter la política latinoamericana en el que tal vez constituya su tema político de fondo: las profundas desigualdades sociales que mantienen a tanta gente en la pobreza y que limitan el desarrollo democrático de estas sociedades.

La evolución que se observa en Chile desde las salidas «fundamentalistas» de los CAL a la negociación informal —en que la cooptación que intentan unos se articula con la extorsión subordinada que practican otros— representa, sin duda, un progreso. Aunque extraordinariamente limitada e imperfecta, la «extorsión cruzada» en que consiste la negociación informal es, en los hechos, una forma de redistribución de la riqueza generada por los proyectos productivos. Por cierto, hay que avanzar más. El desafío específico que los CAL plantean a los profesionales latinoamericanos comprometidos con el cambio social es el de forzar mesas de negociación formal donde se definan compensaciones y criterios para distribuir los costos y beneficios ambientales, económicos y sociales de los proyectos de inversión. Algo así como un ejercicio práctico y democrático de economía política.

La multiplicación de CAL provocada por el avance de la economía exportadora y la consolidación del modelo económico neoliberal en América Latina significarán la apertura de espacios de libertad para la movilización de las comunidades

¹⁸ De paso, como argumenta Joan Martínez Alier, parece necesario cuestionar la idea del ecologismo como un movimiento monotemático propio de sociedades prósperas en su etapa «postmaterialista» (ver, por ejemplo, Inglehart, 1977), y reconocer la importancia del «ecologismo popular» o «ecologismo de la supervivencia» practicado ampliamente por los pobres en muchas partes del mundo (Martínez Alier, 1995).

locales. Aunque carente de objetivos globales de transformación social y ceñida al carácter reactivo y parcial que le es propia, esta movilización puede ayudar a recuperar el tema distributivo y favorecer la discusión sobre cómo superar la pobreza, la exclusión y la polarización social.

Los espacios de libertad que traen consigo los CAL quedan definidos por una serie de tensiones. Estas consisten en indefiniciones estructurales o ambivalencias que pueden ser interpretadas con distintos enfoques y resueltas de distintas maneras. Representan espacios de acción política para los profesionales y las ONG latinoamericanas. Cerraré este trabajo con la discusión de algunas de ellas, lo que puede servir para perfilar mejor el rol técnico y político de los profesionales y activistas de ONG en los CAL. Las tres últimas tensiones son tal vez las principales y su discusión ya ha sido adelantada: se relacionan con el carácter territorial y político-distributivo de los CAL.

1. Tensión entre mediación y negociación: la descentralización política «de hecho»

Los CAL plantean a las autoridades locales una tensión entre el desempeño de sus roles de mediación y de negociación. El de mediación es, por definición, un rol neutro; y el de negociación las define como una parte interesada en el conflicto.¹⁹

Es una tensión propia de la democracia. Las autoridades electas lo han sido con un programa de gobierno que representa los intereses de la comunidad. Su deber es impulsar ese programa y negociarlo en situaciones de conflicto por encima de intereses parciales o de grupos internos de la comunidad. Al mismo tiempo, su neutralidad es importante para garantizar la solución pacífica y oportuna de los conflictos. Como advierte Forester (1989), apegarse al rol de mediación es sustraerse a la posibilidad de alterar las desigualdades de poder prevalecientes, e insistir en el rol negociador con el fin de impulsar los intereses más débiles significa perder independencia y neutralidad.

Sin embargo, paradójicamente, los conflictos ambientales abren la posibilidad a las autoridades locales de no quedar atrapadas en esta disyuntiva y no tener que optar por uno de los dos roles en desmedro del otro. Cuanto mayor el equili-

brio de fuerzas de las partes en disputa en un CAL, en mejor situación se encontrará un alcalde para poder sumar a su función de mediación la de negociar una salida al conflicto que incluya sus propios intereses como autoridad democrática.

El empate de fuerzas en los conflictos favorece una descentralización política «de hecho», la que puede sobrepasar con creces los poderes formalmente otorgados por las leyes a los gobiernos subnacionales, aun por aquellas que explícitamente buscan la descentralización política. En países tan centralistas como los latinoamericanos, los profesionales y ONG, en su trabajo de asesoría a alcaldes o de apoyo a las organizaciones comunitarias, tienen como misión importante el explorar esta posibilidad.

2. Tensión entre participación y negociación ambiental

En la comunidad local pueden haber distintos intereses frente a los CAL suscitados por proyectos productivos. Un interés general en los beneficios que el proyecto pudiera tener en términos de empleo y de estímulo a la economía local, puede contrastar con que haya gente diferencialmente afectada por los impactos ambientales. También podría haber intereses económicos específicos de grupos e impactos ambientales homogéneos. La población o comunidad local, como tal, puede no ser parte directa del CAL.

Sin embargo, la población siempre es un actor importante en los CAL. Hay dos razones principales. Una es que toda negociación ambiental, formal o informal, ya sea llevada a puertas cerradas o en forma abierta, es un hecho público. La población local es el negociador ambiental en última instancia, y la parte que tenga su apoyo queda en una situación privilegiada para hacer variar el resultado de la negociación a su favor (Gorciznsky, 1991).

La segunda razón es que la emergencia de la población local como un actor destacado permite poner a los CAL en la perspectiva más amplia del desarrollo local. La población hace pesar su interés en compatibilizar el crecimiento económico

¹⁹ Forester (1989) discute esta tensión para el caso de los planificadores urbanos enfrentados a conflictos por el uso del suelo.

con la conservación ambiental por encima de intereses y posiciones de grupo. Además, si dispone de los canales adecuados, habrá participado en la formulación de una estrategia de desarrollo local y en definir criterios de ordenamiento del territorio concordantes con aquella. Ese interés y estas políticas formarían parte del mandato democrático local dentro del cual tienen lugar los CAL. Incluso, varios CAL podrían ser evitados si el mandato es claro y fuerte.

La tensión entre participación y negociación de los CAL, entre la comunidad y grupos internos de ella, es un espacio de acción de primera importancia para los profesionales y las ONG. Entre participación y conflictos existen algunos *trade-offs* que pueden ser claves para el desarrollo de las comunidades territoriales. Por ejemplo, el apoyo del profesional a la generación de un mandato democrático local puede fortalecer las posiciones de la comunidad local en los CAL o, incluso, imposibilitar el desarrollo de determinadas actividades, evitando los conflictos que suscitarían. En una escala territorial más amplia, la participación democrática en el diseño de políticas y normas ambientales, nacionales o regionales, puede contribuir a prevenir la ocurrencia de conflictos a nivel local.

3. Tensión entre pasividad y movilización de la sociedad civil

La sociedad civil latinoamericana aparece tensionada entre factores que impulsan su activación y otros que la empujan a la inacción y la pasividad. Los juicios e imágenes en uno y otro sentido se alternan, a veces pretendiendo apuntar a rasgos culturales absolutos. Pero la realidad es más compleja. La activación puede ser inducida desde fuera, en concreto, desde el estado; y la pasividad, puede ser resultado del desaliento derivado de movilizaciones sin éxito.

Ha sido habitual en América Latina que el estado o los partidos políticos, especialmente con ocasión del enfrentamiento de proyectos políticos nacionales, hayan contribuido a movilizar a grupos de la población en su apoyo. El clientelismo político ha sido un mecanismo importante en estas movilizaciones. Pero también es cierto que en las últimas décadas se ha ido haciendo más habitual la movilización autó-

noma de la sociedad civil, movilización que el estado intenta contener o desestimular.

Los CAL chilenos estudiados muestran que la activación y la pasividad pueden ser momentos distintos de un mismo proceso de enfrentamiento entre racionalidad económica (apoyada por el Estado) y defensa de los espacios vitales de la gente. Entre los habitantes de Puchuncaví predominaban sentimientos de impotencia y desconfianza luego que las empresas contaminantes impusieron la lógica de la negociación informal. Cundió el desánimo entre los participantes más activos de la movilización. El nuevo momento de pasividad correspondía más a un momento de reflexión y espera que a un atributo cultural.

Hay, por cierto, factores culturales que empujan en uno y otro sentido. En un estudio de caso entre mujeres pobres de Santiago, aparecieron, por un lado, el machismo, el conservadurismo moral y una concepción no democrática del poder como factores que inhiben la participación comunitaria y, por otro, una marcada inclinación hacia la acción colectiva que explica la habitual proliferación de organizaciones de barrio (Sabatini, 1995). Gramsci señala que la cultura de las masas está formada por elementos culturales diversos e, incluso, contradictorios que se van acumulando, como capas sedimentadas, a lo largo de la historia (Gramsci, 1985; Thompson, 1986).

El profesional o la ONG comprometida con el cambio debe profundizar la comprensión de esta complejidad cultural y de la dinámica oscilante de la participación durante los CAL para que su acción tenga mejores posibilidades de éxito.

4. Tensión entre misión democratizadora de la movilización de la sociedad civil y las relaciones de poder internas de las organizaciones de base

El involucramiento de las comunidades locales en los CAL se hace usualmente desde las organizaciones comunitarias existentes, siendo habitual que las nuevas que se crean se basen en las anteriores. Sin embargo, la misión profundamente democrática de estas organizaciones, especialmente cuando actúan en términos políticos, como es el caso de los CAL, contrasta con su estructura interna de poder. Esta suele pre-

Chile: Conflictos ambientales locales

sentar rasgos autoritarios, predominando entre los miembros de la organización concepciones sobre el origen del poder que difieren de la idea democrática de la soberanía popular. Dentro de estas nociones predemocráticas, el poder aparece más vinculado al rango social y, en general, a desniveles sociales preexistentes.

Cuando los dirigentes no tienen mayor nivel social que la base, lo que es habitual entre gentes pobres, las organizaciones viven una permanente tensión entre base y dirigentes. La desconfianza generalizada hacia los dirigentes comunitarios da lugar a conflictos permanentes, constituyendo un motivo importante de debilitamiento de las organizaciones y de deserción de sus integrantes (Sabatini, 1995).

Los profesionales y ONG tienen que tener especial cuidado con esta tensión, por cuanto pueden fácilmente quedar atrapados en ella. Siendo profesionales comprometidos con el bienestar de la comunidad, es posible que haya sectores de esta que estén dispuestos a reconocerle, de hecho, el poder que no le reconocen a sus dirigentes.

5. Tensión entre competencia y consenso

La competencia entre proyectos políticos y la capacidad de producir soluciones de consenso son dos elementos centrales de la democracia. En América Latina, la democracia se ha caracterizado por ser más fuerte en lo primero que en lo segundo. La inestabilidad política y las soluciones autoritarias y populistas han sido el resultado histórico de este sesgo. La carencia en producir los necesarios consensos es sustituida desde el estado. La raíz de este rasgo político parece residir en patrones culturales de corte «verticalista» que hacen que el conflicto difícilmente se acepte como algo normal en las relaciones sociales.

La violencia política vivida en décadas recientes de autoritarismo ha predispuerto a la población en favor de los consensos. El temor a reeditar los traumas del pasado inclina a la gente a aceptar consensos sin mucha discusión. La población chilena, a pesar de su tradición de participación y activismo político, ha aceptado con relativa facilidad la adopción de medidas neoliberales resistidas en otros países, como es el caso de la privatización de empresas estatales.²⁰

En el caso de los CAL es habitual que el sistema político, con ayuda de la prensa, trate de «producir» e imponer soluciones de consenso a la comunidad afectada. Es lo que pasó en Puchuncaví.²¹ La «opinión pública» es, en último término, un mecanismo de control social. Su imposición a las personas y comunidades produce un efecto de «espiral del silencio», de raíz psicológica, consistente en la renuencia de la gente a quedar excluida de la corriente de opinión dominante (Noelle-Neumann, 1979).

Por lo demás, la población acepta pragmáticamente la negociación informal de los CAL y entra en su juego como lo único que parece posible hacer «por el momento». El consenso, aunque sea considerado injusto, produce un cierto alivio. La tensión entre consenso y competencia es parte esencial de la dinámica de los CAL que los profesionales comprometidos con el cambio deben entender y lograr influir.

6. Tensión entre gestión «externa» de los CAL y las alternativas locales tradicionales

Más allá de su carácter político, los CAL tienen su origen en ciertos impactos o externalidades ambientales. Las ofertas de gestión de los CAL que provienen de fuera de la comunidad tienden a concentrarse en sus aspectos propiamente ambientales. Consisten en formas de evitar, normar o manejar las externalidades y, en general, los problemas que surgen con la conservación de recursos de propiedad común, como el aire, el agua o la fertilidad de los suelos.

Cuando discute los problemas de gestión ambiental de los recursos y bienes públicos, Ostrom destaca dos tipos de ofertas «externas» de gestión: el centralismo estatal y las soluciones de mercado (1990). La primera busca fundamentarse en el conocimiento científico y la información sistemática sobre

²⁰ Por cierto, la autocomplacencia de los dirigentes políticos con el éxito económico ha ayudado, y el país ha tendido a una relativa «chatura en su debate político, intelectual y cultural» (Garretón, 1995).

²¹ Un análisis de la cobertura que la prensa regional y nacional dio al conflicto de Puchuncaví en el período 1992-1993 muestra que los puntos de vista de las empresas y del gobierno tuvieron mucho más espacio que los de la comunidad, incluido el municipio (Sabatini, Mena y Vergara, 1996).

el estado del medio ambiente. Es el clásico estado planificador. La segunda oferta enfatiza la necesidad de definir derechos de propiedad privada y de internalizar las externalidades ambientales en sus causantes. Ambas tiene en común el estar alejadas de la complejidad y especificidad que son propias del medio ambiente de cualquier lugar, y el desestimar el aporte que puedan hacer los habitantes y sus organizaciones al diseño de soluciones adecuadas.

La tensión entre gestión externa y capacidad interna de manejo del medio ambiente local se expresa, por una parte, como una tensión entre «ciencia», representada en este caso por el estado, y «conocimiento ecológico tradicional» (Rojas, 1995) y, por otra, como una tensión entre definición de derechos de propiedad privada y afirmación del control social (colectivo) del medio ambiente local. El profesional comprometido con el cambio, mas allá de sus inclinaciones personales por las soluciones «internas», tendrá que dialogar con las propuestas «externas», respaldadas por el estado y las fuerzas económicas dominantes. Deberá tener en cuenta que no se trata tan sólo de divergencias técnicas o de «estilos de gestión» sino de disputas por el control de los recursos del medio ambiente entre la comunidad local y el sistema político y económico dominante.

7. Tensión entre defensa de la economía territorial y defensa del medio ambiente

El tema ambiental tiende a copar los debates que suscitan los CAL. Las autoridades y empresas tratarán de mantener las negociaciones circunscritas a lo ambiental. Pero, en realidad, lo que está en juego es el control del territorio y las formas de vida locales. La penetración capitalista trae efectos de mucho mayor alcance que los impactos y problemas ambientales. Suele profundizar la dominación de la racionalidad existencial y del espacio vital por la racionalidad económica y el espacio económico. El profesional comprometido con el cambio debe entender que la disputa por la distribución de externalidades ambientales positivas y negativas se inscribe en la lucha por el control económico, social y político de los territorios locales.

8. Tensión entre ecologismo «disciplinario» y ecologismo político-distributivo

La resistencia de empresas y autoridades políticas a considerar otros impactos que los ambientales en los CAL es la resistencia a entrar en el debate de la distribución de la riqueza y las desigualdades sociales. Ese debate está para ellos resuelto: la pobreza se supera únicamente con crecimiento económico.

Sin embargo, el aumento del número de CAL y la tendencia al equilibrio de fuerzas entre las partes concurrentes a cada uno de ellos empujará a autoridades y empresas a salirse de ese esquema y negociar compensaciones. Una vez iniciada, la negociación de compensaciones conduce, implícita o explícitamente, al terreno de lo político-distributivo.

9. Tensión entre *statu quo* y cambio social

El carácter político-distributivo de los CAL será más marcado y tendrá mayor relevancia política cuanto más pobre sea la comunidad territorial envuelta en el CAL. Hay una diferencia política importante entre las disputas distributivas planteadas por CAL que afectan a grupos medios y altos, y las que plantean los CAL que afectan a grupos pobres. Es el ecologismo del *statu quo*, de los ciudadanos-propietarios, comparado con el ecologismo «alternativo», de desafío potencial a las estructuras sociales, que practican los grupos pobres.

EN SUMA

La resistencia de los pobres de América Latina a las externalidades ambientales de los proyectos de inversión que se están desparramando por sus regiones y ciudades abre un campo promisorio de trabajo para los profesionales y ONG inspirados por valores de igualdad, solidaridad y desarrollo democrático. A pesar de tratarse de reacciones sociales que ocurren en un contexto global de desideologización, tienen un importante potencial de transformación social. Establecer el nexo entre lo reactivo y lo propositivo es, precisamente, el desafío fundamental que enfrentan estos profesionales.

La fuerza con que surjan los CAL, por la prestancia de

Chile: Conflictos ambientales locales

las organizaciones de base que protestan, puede ayudar a forzar cambios graduales en el Estado, desde sus niveles descentralizados (los municipios y las agencias públicas locales) hasta el Gobierno central; y desde sus decisiones y programas más puntuales y específicos hasta sus políticas económicas, ambientales y sociales. Establecer una dialéctica de transformación entre estado y sociedad civil parece ser no sólo requisito de éxito sino una de las formas concretas en que se despliega el potencial de transformación social señalado. En este sentido, las versiones extremas de la idea del «desarrollo alternativo» suelen caer en el error de ignorar al estado o de darle la categoría simplista de enemigo.

El trabajo en los CAL puede contribuir a la consolidación de una nueva matriz política para América Latina: una matriz estructurada en relaciones más equilibradas entre estado, economía corporativa y sociedad civil; estructurada en relaciones basadas en la autonomía y la negociación entre esos tres polos.

Los CAL representan, así, un campo de acción prioritario para estos profesionales y ONG. Permiten trabajar por una mejor articulación de lo local —los espacios donde predomina la racionalidad de vida— con los procesos globales —los espacios donde predomina la racionalidad económica. Los CAL son una forma de resistencia a la expropiación de los primeros por los segundos.

Está en juego mucho más que el medio ambiente: el tema de fondo es la defensa de los espacios vitales y del derecho de la gente a decidir cómo aquellos deberán desarrollarse, así como su derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios y los costos generados a lo largo del proceso. De paso, el afianzamiento de esos derechos ciudadanos es la mejor garantía de sustentabilidad ambiental. La experiencia demuestra que esta no debe ser confiada entera ni principalmente a las élites políticas y empresariales.

La transición desde la resolución «fundamentalista» de los CAL a la negociación ambiental informal o velada representa un avance en la dirección correcta, por cierto, modesto. Es una forma, aunque precaria, de redistribución. Hay también algunos CAL que están derivando hacia mesas de negociación formal. La activación de la sociedad civil, producto de los cambios de fondo que están operando en la cultura

política latinoamericana y del avance del desarrollo capitalista neoliberal sobre nuevos territorios, está sosteniendo la multiplicación de los CAL.

Están surgiendo también una serie de conflictos ambientales «de enfoque» que ayudarán a plantear el tema político-distributivo a nivel de las políticas nacionales de desarrollo. El campo que representan los conflictos ambientales para una acción que se juegue por la profundización democrática y el cambio incluirá los territorios nacionales, además de los territorios locales. Y el argumento de la pérdida de competitividad que se levanta en cada país para resistir la formación de políticas ambientales, perderá fuerza en la medida que el movimiento ecologista internacional se afiance.

Nuestras lealtades están y deben estar siempre divididas entre las diferentes escalas de lo territorial, habida cuenta de que el territorio constituye una de las principales fuentes de vinculación y cohesión entre los seres humanos (Friedmann, 1992). El carácter único o global del medio ambiente representa un nuevo argumento, a la vez que una buena posibilidad, para la integración de lo local y lo global en nuestros proyectos de acción como profesionales comprometidos con la defensa de los espacios vitales de la gente.

BIBLIOGRAFÍA

- BINGHAM, GAIL, 1986. *Resolving Environmental Disputes: A Decade of Experience*. Washington, D. C., The Conservation Foundation.
- BOBBIO, NORBERTO, 1992, *El Futuro de la Democracia*, Fondo de Cultura Económica.
- CAJÍA, LUPE, 1994, «Bolivia: la democracia se profundiza», *Nueva Sociedad*, N° 134.
- COHEN, JEAN y ARATO, ANDREW, 1994, *Civil Society and Political Theory*, MIT Press.
- COLBY, MICHAEL, 1991, «La administración ambiental en el desarrollo: evolución de los paradigmas», *El Trimestre Económico* 43, p. 3.
- FALETTO, ENZO, 1992, «La renovación del estado y la consolidación democrática en Chile», *Cuadernos del Foro 90*, N°1, Santiago, CINDE.

- FORESTER, JOHN, 1989, *Planning in the Face of Power*, University of California Press.
- FRANZE, JAVIER, 1994, «La sociedad civil frente a la crisis de la política: control y desentendimiento», *Nueva Sociedad*, N° 134.
- FRIEDMANN, JOHN & LACKINGTON, THOMAS, 1967, *Hiperurbanización y Desarrollo Nacional en Chile: Algunas Hipótesis*, Santiago, CIDU, Universidad Católica de Chile.
- 1988, *Life Space and Economic Space. Essays in Third World Planning*, Transaction Books.
- 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Developments*, Blackwell.
- 1996, *Notes on the Rise of Civil Society & Planning*, Manuscrito.
- GARRETÓN, MANUEL ANTONIO, 1995, *Hacia una Nueva Era Política: Estudio sobre las Democratizaciones*, Fondo de Cultura Económica.
- GEISSE, GUILLERMO & SABATINI, FRANCISCO, 1993, «¿Por qué la Escondida?», *Ambiente y Desarrollo* IX (3).
- GIDDENS, ANTHONY, 1994, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Stanford University Press.
- GORCZINSKY, DALE, 1991, *Insider's Guide to Environmental Negotiation*, USA, Lewis Publishers.
- GORZ, ANDRÉ, 1994, «Ecología política, expertocracia y autolimitación», *Nueva Sociedad* N° 134.
- GRAMSCI, ANTONIO, 1985, *Introducción al estudio de la filosofía (Cuaderno de la Cárcel #11)*, Barcelona, Crítica.
- GUIMARAES, ROBERTO, 1991, «Bureaucracy and Ecopolitics in the Third World: Environmental Policy Formation in Brazil», *International Sociology* 6, p. 1.
- INGLEHART, RONALD, 1977, *The Silents Revolution*, Princeton University Press.
- LANDER, EDGARDO, 1994, *Movimientos sociales urbanos, sociedad civil y nuevas formas de ciudadanía en Venezuela*, Ponencia en el XIII Congreso Mundial de Sociología, Bielefeld, Alemania. Universidad Central de Venezuela (mimeo).
- LERDA, SANDRA y SABATINI, FRANCISCO, 1996, *De Lo Errázuriz a Titi-Titi: el problema de los residuos domiciliarios de Santiago*, Serie Estudios de Caso # 8, Cieplan y Magister de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.
- MALMAN, SANFORD; SABATINI, FRANCISCO y GEISSE, GUILLERMO, 1995, «El trasfondo socioeconómico del conflicto ambiental de Puchuncaví», *Ambiente y Desarrollo* 11, p. 4.
- MARTÍNEZ ALIER, JOAN, 1995, *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Barcelona, Icaria.
- MIRE, FERNANDO, 1994, «La reformulación de lo político», *Nueva Sociedad*, N° 134.
- MOISÉS, JOSÉ ALVARO, 1994, «Partidos y gobernabilidad en Brasil: obstáculos institucionales», *Nueva Sociedad*, N° 134.
- NOELLE-NEUMANN, ELIZABETH, 1979, «Public Opinion and the Classical Tradition: A Re-evaluation», *Public Opinion Quarterly* 43 (2).
- OSTROM, ELINOR, 1990, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press.
- PRONOVOST, GILLES, 1989, «The Sociology of Time», *Current Sociology*, 37 (3).
- ROJAS, ALEJANDRO, 1995, «Confrontación, paradigma y diálogo intercultural en la negociación de un conflicto ambiental: el caso de Clayoquot Sound, Canadá», *Ambiente y Desarrollo*, 11 (4).
- SABATINI, FRANCISCO, 1994, «Espiral histórica de los conflictos ambientales: el caso de Chile», *Ambiente y Desarrollo*, 10 (4).
- 1995, *Barrio y Participación: Mujeres Pobladoras de Santiago*, Santiago: Universidad Católica de Chile - Centro de Estudios Sociales SUR.
- MENA, F.; y VERGARA, P., 1996, «Otra vuelta a la espiral: el conflicto ambiental de Puchuncaví bajo democracia», *Ambiente y Desarrollo*, 12 (4).
- SEPÚLVEDA, CLAUDIA, 1995a, «La construcción social de la demanda ambiental entre los habitantes de Compu: el caso de Golden Spring», *Ambiente y Desarrollo*, 11 (4).
- 1995b, «Debilidad en la gestión ambiental local y centralización de los contenidos en los conflictos ambientales: el caso de Golden Spring», *Ambiente y Desarrollo*, 11 (2).
- SUSSKIND, LAWRENCE; BACOW, LAWRENCE y WHEELER, MICHAEL, 1983, *Resolving Environmental Regulatory Disputes*, Rochester, Vermont, Schenckman.
- THOMPSON, KENNETH, 1986, *Beliefs and Ideology*, London, Ellis Horwood, Tavistock Publications.